

Paramilitarismo y barbarie

Carlos Fazio

Universidad Nacional Autónoma de México

Tras los comicios intermedios del 5 de julio de 2009 comenzó en México una fase de signo incierto. La debacle electoral de Felipe Calderón y el Partido Acción Nacional entraña el peligro de un desborde autoritario. En un país sumido en una violencia reguladora en ascenso, en recesión económica, con una crisis de legitimidad de los partidos políticos parlamentarios y en el marco de un Estado de tipo delincuencial y mafioso, podría acentuarse el empaque autoritario de Calderón.

Apoyado en las Fuerzas Armadas, en sus tres primeros años de desgobierno Calderón ha intentado presentarse mediáticamente como un “salvador” en busca de la servidumbre voluntaria de las masas. Ante la exacerbación de la violencia, inducida y/o potenciada por su “cruzada” contra los *malos*, la propaganda del régimen quiso construir en torno a su figura a un líder providencial y mesiánico. En octubre de

2007, Calderón dijo que “protegía al país con el monopolio del poder”. Se acentuaba ya entonces su mentalidad autocrática; un autismo autoritario como forma de degradación de la ley hacia su uso arbitrario, o en el sentido de que quien la ejerce ya no representa a la ley sino que la encarna.

Desde entonces, la auto-atribución del “monopolio del poder” estuvo basada en el uso indebido de la fuerza y la violencia estatales. En particular, de unas fuerzas armadas virtualmente *privatizadas*, que obedecieron sin chistar a su comandante supremo y aceptaron su nuevo papel en la vida política nacional. Mala cosa. La política no es asunto de militares, grupo corporativo, jerárquicamente estructurado (autoritario-servil). O de otra manera: cuando los militares incursionan en el ámbito político se abona el camino hacia un estado de emergencia, con suspensión gradual, formal y real, de garantías.

La generalización del concepto de guerra y el aumento de la violencia oficial se han dado en detrimento de valores éticos y morales, de las garantías civiles y los derechos humanos. Hannah Arendt decía que “el engaño, la falsificación deliberada y la mentira pura y simple son empleados como medios legítimos para lograr la realización de objetivos políticos”. Cabe añadir en ese contexto, según la famosa frase de Karl von Clausewitz, que “la guerra no es simplemente un acto político, sino un verdadero instrumento político, una realización de la misma por otros medios”. Una idea que, por cierto, estuvo en la base del nacionalsocialismo.

La guerra es un acto de fuerza física para imponer la voluntad al enemigo. El enemigo es el objetivo, y no hay límite para la aplicación de dicha fuerza. El problema es determinar quién es el enemigo. Bajo un régimen de excepción, la laxitud del concepto de enemigo suele ser muy amplia. Pero conviene tomar en cuenta que, en general, para un régimen cívico-militar de signo conservador, la razón de ser del instituto armado es destruir al enemigo. Aniquilarlo.

Los grupos de comportamiento sectario –o de masas artificiales como llamaba Freud al Ejército y la Iglesia–, tienen determinadas características. La formación militar modela para jerarquizar, homogeneizar y uniformizar; para separar a sus

miembros de la sociedad civil y convertirlos en engranajes de una maquinaria corporativa. El objetivo primero es la obediencia sin cuestionamiento al superior. El superior siempre tiene la razón. Es una obediencia a la autoridad, no a la ley. Es la “obediencia debida”. En su interior se inculca la pertenencia ciega al grupo. Y se funciona de acuerdo a consignas tales como la Patria, la bandera, la democracia, aunque ellas no tengan ningún contenido o su significado esté tergiversado.

Conviene recordar, además, que el ejército tiene armas. Y que las armas son para matar. Específicamente, para matar seres humanos. Y dado que el objetivo es la destrucción del enemigo, las armas son el medio. Pero además, el objetivo primario de las fuerzas armadas, al que se deben subordinar todos los demás, es ganar la guerra por cualquier procedimiento. Si para ello hay que violar la Constitución y la ley, la guerra lo legitima. Para la consecución de ese fin, un sentimiento común del soldado es la indiferencia frente al semejante. Se considera al otro como no humano. Una cosa. Un número. Un elemento. El enemigo es desprovisto de toda personalidad y humanidad. La preocupación es de índole administrativa y no ética. Los valores “morales” se desprenden de las necesidades técnicas. Del éxito de la guerra. Como organismo grupal de procedimiento sectario, el ejército está provisto de una “moral” que prohíbe todo tipo de cuestionamiento a la cadena de mando. Por esa vía, las más de las veces se legitiman el crimen, la tortura, el terror, la violación, el robo de niños, el genocidio. Ejemplos sobran. Y tales riesgos, en el México actual, están presentes.

Jóvenes desechables

Aparte de la irresponsable pretensión de inducir a la población mexicana a un alineamiento orgánico, legitimador, con el Estado, a la guerra reguladora sin fin que dice librar Calderón contra los cárteles de la economía criminal, se suma la intención encubierta de fomentar y/o permitir el accionar de grupos civiles de autodefensa armada, una salida que en países como Colombia derivó en la paramilitarización y el terrorismo de Estado.

En julio de 2009, tras el secuestro y ejecución de dos líderes de la comunidad Le Barón en Chihuahua por un grupo de sicarios, el gobernador José Reyes Baeza anunció la creación de una “policía comunitaria” provista con armas largas y cortas de alto poder y equipos de radiocomunicación. Luego dio marcha atrás, pero la absurda decisión de armar a la población civil para que hiciera justicia por su propia mano llamó la atención, porque Chihuahua era –y sigue siendo– la entidad más militarizada del país y localidades como ciudad Juárez estaban virtualmente en estado de sitio.

En ese contexto, el 1 de septiembre siguiente un comando de cuatro hombres armados irrumpió en el centro de rehabilitación Aliviane, especializado en adictos a las drogas en Ciudad Juárez, formó con violencia a 22 jóvenes contra una pared interior y los rafagueó con disparos de AK-47, conocidos como *cuernos de chivo*. 18 murieron. Un día antes, el secretario de Seguridad Pública de la entidad, Víctor Valencia, había declarado que los centros de rehabilitación se habían convertido en un “semillero” de criminales, porque los cárteles reclutaban allí adolescentes considerados “desechables”. Y según la procuradora de justicia estatal, Patricia González, el múltiple homicidio era parte de una guerra de “exterminio”.

Dos días antes, en el malecón de Navolato, Sinaloa, otro comando de características similares e idénticas armas, había asesinado a diez jóvenes, entre ellos dos mujeres y tres menores. Dos de las víctimas tenían antecedentes por robo de autos. Una semana antes, la presidenta del Frente Cívico Sinaloense, Mercedes Murillo, había denunciado que en lo que iba de 2009 habían sido localizados 35 jóvenes asesinados por “escuadrones de la muerte”. Para justificar sus crímenes, los asesinos dejaron “mensajes” adheridos a las ropas de sus víctimas, donde los calificaban como “ratas”.

Entonces, ambas matanzas reunían elementos comunes. Se estaría ante el exterminio de “jóvenes desechables” por vengadores anónimos, lo que en Brasil y Colombia se conoce como “limpieza social”. Con un antecedente adicional: en mayo anterior, un periódico capitalino había entrevistado al jefe de un comando parapolicial autodenominado *El Grupo*, financiado por empresarios, comerciantes y profesionales. Según la fuente, el comando de ajusticiamiento privado actúa en México desde hace 12 años, y habría surgido del “hartazgo ciudadano” ante la incapacidad del Estado para combatir a la delincuencia. ¿Su misión? Negociar con secuestradores la liberación de sus víctimas, pero también perseguir, capturar, interrogar, torturar y decidir quién muere. *El Grupo* recluta civiles, uniformados en activo y ex policías. “Hacemos justicia donde el Estado no la aplica”. Una justicia anónima, vengativa, extralegal. El declarante dijo que a algunos “monstruos” los alcanza “Dios”. El método puede ser un tiro en la cabeza y “hacer aparecer como que la víctima cayó en un enfrentamiento en la calle” (sic). ¿Falsos positivos en México, como en Colombia?

La información consigna que *El Grupo* opera de modo clandestino, pero buena parte de sus acciones de inteligencia, rastreo de redes telefónicas, seguimiento fotográfico y operativos de captura son realizados de manera conjunta con autoridades policiales federales, estatales y municipales; mandos que saben de sus estrategias y los métodos que aplican. Entre ellos, la tortura.

En ese contexto, Marcela Gómez Zalce consignó que Felipe Calderón recomendó en privado a empresarios de Ciudad Juárez y Monterrey la contratación de servicios de seguridad formados por ex militares, de preferencia extranjeros. Lo que a su juicio demostraría la fallida estrategia gubernamental anticrimen, y la legalización *de facto* del paramilitarismo. A su vez, el ex diputado Alfonso Suárez del Real acusó al gobierno federal de fomentar la creación de grupos paramilitares, con lo que se estaría renunciando a una de las prerrogativas esenciales del Estado: el monopolio legítimo de la violencia.

Sin embargo, se podría estar ante un nuevo fenómeno: la “colombianización” de México, por la vía de una paramilitarización del país bajo protección oficial. El paramilitarismo no es, como se pretende, un actor independiente, a la manera de una “tercera fuerza” que actúa con autonomía propia. Es, como en la matanza de Acteal, Chiapas (1997), una estrategia del Estado ligada al ejército y basada en la doctrina de contrainsurgencia clásica de la Escuela Francesa, asimilada y perfeccionada por el Pentágono y la Agencia Central de Inteligencia (CIA). En el caso mexicano existe una relación estructural, histórica, entre quienes practicaron la *guerra sucia* y los cárteles de la economía criminal. Los viejos *guerreros sucios* que asesinaron y desaparecieron civiles y guerrilleros en los años 60 y 70, entre ellos muchos mandos castrenses y policiales, nutrieron a la nueva generación de

narcotraficantes, secuestradores y asaltantes, y hoy podrían ser refuncionalizados por el gobierno con fines de control social.

El Operativo Chihuahua

Mientras permanecen intocadas las estructuras patrimoniales y financieras de los cárteles de la economía criminal, el poder militar crece y se expande por todo el territorio mexicano. En un aparente contrasentido, a la vez que se profundiza la anticonstitucional intervención del Ejército en tareas de “seguridad interior”, se multiplican los grupos paramilitares, de “autodefensa” y las guardias privadas. Con un dato irrefutable: a mayor militarización, mayor violencia.

Los expertos ponen al Operativo Conjunto Chihuahua, bajo el mando del general Jesús Espitia, como emblema del fracaso de Calderón en su “guerra” al crimen. Pero como adelantábamos arriba, podríamos estar asistiendo a un fenómeno diferente. La extrema derecha utiliza el miedo cuando está desarmada y el terror cuando está armada. Y como en toda propuesta autoritaria de rasgos neofascistas, lo más paradójico es que la inconformidad contra el orden existente se manipula demagógicamente para consolidarlo, y perpetuar así la miseria, la exclusión política y la violencia. La lógica es la misma de siempre: se trata de inflar al enemigo –los judíos, los negros, los comunistas, los subversivos, los indígenas zapatistas– para canalizar en su contra los propósitos más reaccionarios generados por las contradicciones de clase y la crisis social y política.

En ese marco, la violencia irracional lejos de cesar se incrementó. Otros 10 jóvenes fueron asesinados el 16 de septiembre de 2009 en otro centro de rehabilitación para adictos en Ciudad Juárez. Según el gobernador Reyes Baeza, “no es casualidad: es parte de la guerra entre grupos criminales”. Así, a la política del acostumbramiento se sumaba ahora la de la “normalidad”. Y como las matanzas son “normales” entre ellos (los “indeseables”), el Estado justifica los crímenes y se lava las manos. Al fin y al cabo no son humanos. Sólo que Gustavo de la Rosa, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua, estimó entonces en “más de 300, tal vez 500”, los jóvenes ejecutados en la entidad en actos de “limpieza” o discriminación por motivos de condición social. El diputado local, Víctor Quintana, lo atribuyó a escuadrones de la muerte dedicados a “exterminar” adictos.

La fascinación por la mano dura, el ambiente de terror, la “depuración” criminal, la mal llamada limpieza social, el sicariato y los escuadrones de la muerte forman parte de las operaciones violentas a gran escala propias de sociedades que se internan en procesos totalitarios. Por lo general, los móviles son atribuidos al ánimo descontrolado de retaliación de elementos de los cuerpos armados del Estado o a motivaciones ideológicas que corresponden a imaginarios de higiene y asepsia social, étnica e incluso a una moral maniquea.

Sin embargo, pese al discurso negacionista oficial, cabe reiterar que, en sus diferentes modalidades, el paramilitarismo es un hecho político ligado históricamente con las estructuras militares y policiales del Estado. En países como Colombia suplanta ya a los mismos partidos, sus creadores. El paramilitarismo forma parte del proceso de institucionalización del orden autoritario. Su función es exterminar opositores y/o a la “escoria social” y paralizar al movimiento de masas por el terror, conservando al mismo tiempo las formas legales y representativas

caducas, al hacer clandestina la represión estatal. La “estética” de la discriminación es parte de la estrategia paramilitar, que no se trata simplemente de un proyecto armado de *guerra sucia*, sino de la consolidación de un modelo de sociedad. Ante la mirada cómplice de muchos y la pasividad de las mayorías, los cuerpos seccionados, mutilados, lacerados con sevicia, buscan garantizar la eficacia simbólica del mensaje enviado al colectivo social: la alteración del cuerpo del *enemigo*, en función del sometimiento de la población civil al control y la subordinación, a través del miedo, como principio operativo.

En ese contexto, cabe recordar el análisis titulado “La Secretaría de la Defensa Nacional en el combate al narcotráfico” (2008), donde la Sedena alertaba sobre el riesgo de la inviabilidad del país ante la “previsible simbiosis” entre cárteles criminales y “grupos armados desafectos al gobierno”, objetivos a “aniquilar” mediante una *cruzada* nacional de tipo contrainsurgente.

La barbarie civilizada

Frente a la masificación de la barbarie y el uso mediático del horror como espectáculo, conviene rescatar el carácter central del montaje de Estado en torno a la ejecución sumaria de Arturo Beltrán Leyva en diciembre de 2009, y la manipulación y profanación del cuerpo del presunto delincuente, exhibido como trofeo de guerra en la posterior difusión visual propagandística del régimen.

El obispo de Saltillo, monseñor Raúl Vera, definió el *operativo* del comando de elite de la Infantería de Marina que intervino en la acción en una zona residencial de Cuernavaca, Morelos, como una “ejecución extrajudicial”, un “asesinato”. Desde Copenhague, en la *legalización* triunfalista del hecho, Felipe Calderón lo presentó como “un logro muy importante para el pueblo y el gobierno de México”. Al respecto, el psicoanalista Alberto Sladogna se refirió al tratamiento de la muerte de Beltrán Leyva como una acción de la “barbarie civilizada” regida por el criterio de “eficacia”, como en la Alemania nazi.

Como antecedente, cabe recordar también, que a comienzos de los años sesenta, en Fort Bragg, de la mano de los ideólogos de la Escuela Francesa Roger Trinquier y Paul-Alain Léger, Estados Unidos adoptó las técnicas de la “guerra moderna” (la *guerra sucia* antisubversiva aplicada por el ejército galo en Argel), que luego pusieron en práctica tropas aerotransportadas del Pentágono (*boinas verdes*) en la “operación Fénix”, en Vietnam. Después, desde la Escuela de las Américas y otros centros de adoctrinamiento castrense, Washington fomentaría los escuadrones de la muerte y los grupos paramilitares e introduciría la doctrina contrarrevolucionaria en las fuerzas armadas latinoamericanas. El modelo hemisférico más acabado sería la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), de Argentina, cuyo GT 3.3.2 –código dado al grupo de tarea de los marinos argentinos–, se especializaría en el secuestro, la tortura y la eliminación física de los “enemigos de la Patria”.

Incluir el terror político en una dialéctica entre la razón y la locura atañe a la humanidad entera. Dice Marcelo N. Viñar que las fronteras entre sinrazón y simbolización, no son individuales ni victimológicas, sino societarias. Así como la tortura moderna no es una enfermedad del torturado, sino un mal endémico de la

civilización, que crece y se expande con el progreso, como cualquier tecnología perfectible y robotizable, como cualquier industria, la teatralización del triunfo sobre Beltrán Leyva –la víctima como espectáculo a través de la divulgación de fotos con el cadáver semidesnudo, los pantalones abajo y decorado con billetes ensangrentados, amuletos y joyas– no es un barbarismo retardatario y salvaje (la “semiótica bárbara” o la devoción al “culto paramesiánico”, escribió Monsiváis), sino una necesidad del poder en la sociedad mexicana actual, su reverso abyecto pero necesario.

Desde la experiencia de la Gestapo y los campos concentracionarios nazis, la guerra sucia contra la independencia de Argelia y las escuelas de contrainsurgencia del Comando Sur del Pentágono, Washington ha producido empresas de exterminio y expertos militares de una tecnicidad temible. Así, más allá el crimen anónimo y de la escenografía y los falsos deslindes oficiales –las instituciones operaron de manera fantasmática, intangible: no se sabe quién ordenó el montaje mortuario ni quién tomó y distribuyó las fotos de Beltrán Leyva–, los infantes de Marina que intervinieron en Cuernavaca dieron un trato eficiente al delincuente y su cadáver.

En el caso de marras, *haiga sido como haiga sido* –dice Alberto Sladogna–, la “barbarie civilizada” pasó del cuerpo de la víctima al cadáver. El cuerpo provoca la erótica del duelo, mientras el cadáver es un “monto biológico”, una “carroña”. Una carroña corrompida que sirvió de alimento a los carroñeros: “En su guerra sucia, los medios de comunicación se alimentan y nos alimentan con carroña”. Ergo: los delincuentes no son humanos, son carroñas y deben ser eliminados. En la construcción del “enemigo” subyace el criterio de eficacia: lo que antes era calificado de bárbaro ahora es civilizado: un “logro” del pueblo y del gobierno de México (Calderón *dixit*), donde queda difuminada la frontera entre la actividad de Santiago Meza López, *El Pozolero* (que disolvía cadáveres con ácido) y la maquinaria de guerra puesta en marcha para convertir el cadáver que fuera de Beltrán Leyva en “un narco mensaje civilizado”.

En un mundo de impostura y simulación, donde el terror es un espectáculo cotidiano y trivializado –lo que remite a la banalidad del mal de la que nos hablaba Hanna Arendt–, hay que remarcar que el terror de Estado y la violencia reguladora son concebidos y ejecutados por hombres para destruir a otros hombres, y se instalan en condiciones sociopolíticas o históricas determinadas. Se trata de “procesos” históricos concretos que construyen el progreso o el horror. Hoy, en México, la barbarie civilizada opera a través de personas y aparatos concretos, en pleno descampado y a la vista de toda la sociedad. La puesta en escena fue amplificada por unos medios amarillistas que operaron, en la coyuntura, como vehículos de propaganda de la “estrategia integral de seguridad” del régimen calderonista en su cruzada contra los malos. A la sazón, una “guerra” parcial y limitada, no sólo por la selección de los cárteles de la economía criminal a exterminar, sino por la exclusión en materia investigadora y persecutoria, de narcobanqueros, narcoempresarios, narcopolíticos, narcojueces.

Llama la atención, que las primeras noticias sobre la existencia de “grupos de exterminio” o “de limpieza y trabajo rudo” bajo el calderonismo surgieron en otro municipio gobernado por Acción Nacional: el de San Pedro Garza García, en Monterrey, Nuevo León, donde el alcalde Mauricio Fernández Garza, uno de los

hijos fundacionales del PAN, había “consensuado”, precisamente con los Beltrán Leyva, su plan de seguridad pública.

Juárez, Freud y los hijos de puta

Cuando el 11 de febrero de 2010, Luz María Dávila, madre de dos jóvenes *ejecutados* por un comando paramilitar en el fraccionamiento Villas de Salvácar, Ciudad Juárez, increpó de manera personal a Felipe Calderón, lo llamó mentiroso por haber afirmado que sus hijos y otros 13 muchachos víctimas de la matanza eran pandilleros. Otra mujer, Patricia Galarza, le pidió que sacara al Ejército de la ciudad. Dijo: “Padecemos una guerra que nunca pedimos”.

Era la primera puesta en escena del Foro *Todos Somos Juárez*, y la ira de una sociedad agraviada le estalló en la cara a Calderón. El *mea culpa* presidencial no fue suficiente. La retractación sobre su afirmación inicial, cuando tipificó la matanza como un “pleito entre pandillas”, fue tibia. Como para que quedara constancia de que pidió disculpas “si acaso ofendió” a las víctimas y sus deudos, pero sin asumir responsabilidad. El hombre mejor informado de México, a la sazón abogado constitucionalista, nunca rectificó que había hecho una aseveración condenatoria absoluta y totalmente falsa, sentenciando *ipso facto* a los jóvenes asesinados como pandilleros, sin asumir siquiera la presunción de inocencia... ¡de las víctimas!, mientras quedaran pendientes las investigaciones criminológicas.

Las palabras de Luz María Dávila, la *madre coraje*, desplazaron de los medios la demagogia oficial y en los días subsiguientes el gobierno se vio obligado a montar un operativo de control de daños por *interpósita persona*. El alegato más sonado fue el de Héctor Aguilar Camín, quien admitió que “el Presidente se equivocó al precipitarse” y acusar a los jóvenes de pandilleros, pero expresó su desacuerdo con que le reclamaran a Calderón por los muertos: “Como si él, o Gómez Mont, o el Ejército (...) hubieran matado a esos muchachos (...) Los asesinos son los asesinos (...) ¡El gobierno no mató a los muchachos de Juárez, los mataron esos hijos de puta! ¡Esos son los hijos de puta! ¡Volteémonos contra ellos! (...) Los hijos de puta son los hijos de puta”.

Más allá de las tautologías empleadas que poco esclarecen, a Aguilar Camín podría aplicársele el término de negación (*Verneinung*) propuesto por Sigmund Freud en 1925, para caracterizar un mecanismo de defensa mediante el cual el sujeto expresa de manera negativa un deseo o un pensamiento cuya presencia o existencia niega. En términos metapsicológicos, Freud lo explicó a partir de la frase de un paciente: “Me pregunta usted quién puede ser esa persona de mi sueño. Mi madre, desde luego, no”. “Se trata seguramente de la madre”, apunta Freud, quien prescinde de la negación y acoge tan sólo el contenido estricto de las asociaciones. En la frase “no es mi madre”, lo reprimido era reconocido de manera negativa, sin ser aceptado. Según el *Diccionario de psicoanálisis* de Roudinesco y Plon, “la denegación es un medio para tomar conciencia de lo que se reprime en el inconsciente”.

A la frase de Aguilar Camín “¡El gobierno no mató a esos muchachos, los mataron esos hijos de puta!”, podría aplicarse el criterio freudiano de “no vayan a pensar que fue el gobierno”. Si no fue Calderón o el gobierno, por qué lo desmintió: “Aclaración no pedida, confesión de parte”. Pero además, en términos maniqueos,

Aguilar llamó a los juarenses a voltearse contra los “asesinos”; propuso canalizar la ira contra esos “hijos de puta”, que no están, aseveró, en las filas gubernamentales. Lo que podría remitir al ex gobernador Montiel: “Las ratas no tienen derechos humanos. A las ratas hay que exterminarlas”.

En sentido contrario, el segundo visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua, Gustavo de la Rosa, afirmó entonces que “los violentos actúan bajo la protección del Estado”. Y según Clara Jusidman, las víctimas civiles de Ciudad Juárez, lo son “de una guerra entre dos mafias por el control del territorio, cada una apoyada por miembros de la clase política y de las fuerzas de seguridad y de justicia”.

Patricia Galarza le dijo a Calderón que la tortura se aplica en Chihuahua como medio sistemático de investigación. Que se pueden documentar mil casos de desaparecidos, torturados y ejecutados extrajudicialmente por miembros del Ejército o fuerzas federales. Calderón sólo admitió “abusos”. Lo cierto es que con el Operativo Conjunto Chihuahua hubo un escalamiento del conflicto, que se transformó en una guerra urbana de tipo contrainsurgente, remedo del modelo Medellín contra la Comuna 13, en 2002, donde se arrasó el tejido social comunitario por la vía de la fuerza militar y “jurídica”, y derivó en un Estado paramilitar.